SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 30/2015

Recomendación N°	30/2015
Autoridad Responsable	Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga
Expediente	1VQU-0614/2014
Fecha de emisión	22 de septiembre de 2015

HECHOS

Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió la queja presentada por Q1, quien refirió que el 6 de junio de 2014, su hijo V1, menor de edad, sufrió un accidente en el Centro Acuático que se encuentra en el interior del Parque Tangamanga I, debido a que los alumnos de la Escuela Secundaria 1 se encontraban en un convivio entre compañeros, el cual fue organizado por la sociedad de padres de familia y habían acordado turnarse el tiempo para vigilar el desarrollo de las actividades.

La quejosa manifestó que antes de las 12:00 horas de ese día, el Director del plantel y otras integrantes de la mesa directiva, acudieron a su domicilio y le informaron que V1 había sufrido un accidente en una de las albercas, el cual ocurrió cuando V1 cargaba en su espalda a uno de sus compañeros y cayeron, pero su hijo se fue al fondo de la alberca donde permaneció un tiempo, y que el lugar no contaba con personal de salvavidas, ni con material médico, por lo cual el cerebro del niño no recibió suficiente oxígeno, luego lo llevaron al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” para que recibiera la atención médica.

La denunciante manifestó que al llegar al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” le informaron que su hijo se encontraba estable pero grave, ya que había sufrido un paro cardiorespiratorio y tendría que ser trasladado al área de terapia intensiva de pediatría; posteriormente se le informó que V1 tenía un daño neurológico severo derivado de la falta de oxigenación del cerebro.

Agregó que V1 fue atendido en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” del 6 de junio al 18 de diciembre de 2014, fecha en que fue dado de alta, con diagnóstico de asfixia por inmersión, para lo cual tuvo que firmar un pagaré por la cantidad de \$428,053.26 (Cuatrocientos Veintiocho Mil Cincuenta y Tres Pesos 26/100 MN), por concepto de los gastos médicos.

Derechos Vulnerados	<ul style="list-style-type: none"> ✓ A la vida. ✓ A la integridad y seguridad personal. ✓ Al interés superior del menor. ✓ A la legalidad y seguridad jurídica.
----------------------------	---

OBSERVACIONES

Los hechos señalan que el 6 de junio de 2015, cuando V1 se encontraba con sus compañeros en el interior de una alberca del Centro Acuático 1, sufrió una caída junto con otro de los estudiantes, lo cual ocasionó que se sumergiera al fondo de la piscina, de acuerdo al testimonio de una de las madres de familia que se encontraba presente, fue necesario gritar en diversas ocasiones que un niño se ahogaba para que otra persona ingresara a la alberca para su rescate.

Aunado a lo anterior, se cuenta con la evidencia que acredita que tampoco se contaba con ambulancia ni personal en el área de enfermería, como se había ofrecido previamente en la cotización remitida por el representante del Centro Acuático 1 al Director de la Escuela Secundaria 1, por lo que otras personas que también acudieron al lugar en esa fecha comenzaron a brindarle a V1 los primeros auxilios, en tanto que otros llamaban a los servicios de emergencia para que acudieran a prestarle atención médica a V1.

De acuerdo a lo narrado por T2, la ambulancia llegó al lugar de los hechos 30 minutos después y durante este tiempo no se hizo presente ninguna persona capacitada en primeros auxilios o paramédicos para atender este

SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 30/2015

tipo de incidencias. Cuando V1 fue atendido por los paramédicos que arribaron al Centro Acuático 1, se determinó trasladarlo de urgencia al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” con la finalidad de recibir la atención médica oportuna, ya que hasta esos momentos no reaccionaba a ningún estímulo.

V1 ingresó al área de terapia intensiva infantil del nosocomio antes mencionado, debido a que presentaba un cuadro de asfixia por inmersión que se agravó con un paro cardiorespiratorio, por lo que fue necesario realizarle diversas cirugías para estabilizarlo; sin embargo, la ausencia de oxigenación en su cerebro ocasionó una encefalopatía hipóxico isquémica, la cual produce trastorno de la conciencia, alteraciones del tono muscular, modificaciones de los reflejos y crisis convulsivas, lo cual afectó severamente su estado de salud.

Derivado de lo anterior, V1 permaneció internado en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, por seis meses comprendidos del 6 de junio al 18 de diciembre de 2014, ya que fue dado de alta con diagnóstico de epilepsia sintomática, secuelas neurológicas, asfixia por inmersión, encefalopatía hipóxico isquémica; durante este periodo, personal del Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga contactó a Q1, y erogó cantidades de dinero para cubrir los gastos generados por la atención médica que requirió V1. Sin embargo, es necesario que se garantice en todo momento la atención médica y de fisioterapia que requiere V1, derivado de los hechos en los que resultó afectado.

Los elementos de convicción que se recabaron pusieron en evidencia que no se tomaron acciones preventivas y efectivas para garantizar la protección de la integridad física no sólo de V1, sino en general de las personas presentes en el parque acuático, circunstancia que contraviene lo establecido en el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de sano esparcimiento para su desarrollo integral, lo cual en el presente caso no ocurrió ya que no realizaron acciones necesarias para que se garantizara la protección de la integridad física de V1, ni para vigilar las áreas de esparcimiento dentro del Centro Acuático de que se trata.

Aunado a lo anterior, también se observó que el Centro Acuático 1, no cuenta con manuales o reglamentos relativos a la Seguridad en Albercas o Balnearios Públicos, a través del cual se establezca que en la prestación del servicio se debe tener un sistema de vigilancia a cargo de salvavidas debidamente certificados por la Autoridad para el rescate, salvamento y atención de los primeros auxilios; que se señale también que toda alberca con una superficie mayor a los 1200 metros cuadrados, debe ser vigilada por un mínimo de cuatro salvavidas, y en caso de que la piscina exceda de estas dimensiones, deberá estar protegida por los elementos salvavidas que sean necesarios, dependiendo la cantidad de bañistas que se encuentren en el lugar, lo que en el presente caso no aconteció, ya que el día de los hechos no había salvavidas ni equipo de resucitación pulmonar.

En efecto, de los elementos que se recabaron en el presente caso, se observa que el Centro Acuático ofreció servicios de salvavidas y que contaba con ambulancia y personal médico para cualquier incidencia; sin embargo, fue evidente que al momento que ocurrió el accidente de V1 no había salvavidas en el lugar, ni se contaba con personal capacitado en primeros auxilios.

Es importante que el Centro Acuático 1 cuente con un reglamento de seguridad en su operación, el cual contemple que el personal de salvavidas que se contrate, tenga la capacitación suficiente para el desempeño de su labor, incluso con evaluación de aptitud física, curso de rescate acuático, primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar y seguridad en albercas. Aunado a lo anterior, el establecimiento debe contar con torres para los salvavidas, con un equipo indispensable para llevar a cabo un rescate o salvamento, un botiquín para primeros auxilios y un equipo de resucitación cardiopulmonar, así como un sistema de comunicación a centros de emergencia.

SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 30/2015

En el mismo orden de ideas, que el Centro Acuático 1 cuente con equipo para atención en primeros auxilios, así como dispositivos suficientes para rescate, salvamento y de flotabilidad para intervenir y brindar una seguridad efectiva, collarines cervicales, equipo manual de respiración artificial, mascarillas, equipo para mantener las vías aéreas permeables.

Lo anterior, tomando en consideración que el 6 de junio de 2014, el Centro Acuático no cumplía con ninguna de las especificaciones antes mencionadas, no obstante que en la cotización remitida al Director de la Escuela Secundaria 1, se estableció el compromiso de prestar todos estos servicios, incluyendo los de emergencia mediante ambulancias con paramédicos que estarían en el interior del centro recreativo, lo cual ante esta omisión se puso en riesgo la vida de V1, ocasionando una alteración grave en su salud.

Con base en las constancias que se integraron al expediente de queja, se observó que el día de los hechos, después de haber ocurrido el accidente de V1, la Coordinación Estatal de Protección Civil realizó una visita de inspección al citado Centro Acuático 1, fue cuando se dio a conocer una lista de personal salvavidas, así como un área de enfermería con personal paramédico para atender en primera instancia cualquier tipo de accidente; no obstante ello, de los datos que se recabaron se observó que el día de los hechos no había personal salvavidas.

Es importante destacar que los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga “Prof. Carlos Jonguitud Barrios” y Tangamanga II, forman parte de la Administración Estatal y tienen bajo su responsabilidad los asuntos que le encomienda el artículo 52 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, por lo tanto, los trabajadores de cada uno de los centros, tienen el carácter de servidores públicos. Incluso se advierte como funciones para esos Centros de Recreación, promover la capacitación, adiestramiento y actualización del personal de los Centros, en coordinación con la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado así como coordinar las acciones necesarias para mejorar los servicios que ofrecen a la comunidad en general.

Por lo antes expuesto, se considera que con las omisiones que se observaron por parte del personal del Centro Recreativo, se vulneraron los derechos humanos de V1, ya que no se garantizó como a todas las personas que acudan al Centro Acuático, su integridad física e incluso su vida, sobre la base del respeto a su dignidad e integridad, como lo previenen los artículos 1, párrafo tercero; 3, párrafo segundo, fracción II inciso c); 4, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aunado a lo anterior, es de relevante importancia mencionar la falta de reglamentación interna por parte del Centro Recreativo, en lo relativo a las medidas de protección civil en los lugares donde se prestan servicios de albercas, piscinas, balnearios o centros donde se desarrollen actividades acuáticas, además del deber de cuidado al que estaba obligado a garantizar, toda vez que forma parte de la administración municipal. Por lo que el Centro Recreativo está obligado a reglamentar en lo concerniente para así garantizar que situaciones como las descritas en el cuerpo del presente pronunciamiento no se vuelvan a repetir.

Al respecto, es aplicable el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expuesto en el párrafo 106 del Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, sentencia de 20 de enero de 1999, en el cual refirió que la Corte considera pertinente reiterar, en este momento que el Estado está obligado, a adoptar las medidas necesarias para asegurar que violaciones como las que han sido declaradas en la presente sentencia no se producirán de nuevo en su jurisdicción, y en el caso se busca que se tomen medidas efectivas a efecto de garantizar la no repetición de este tipo de hechos.

Además de lo anterior, consta lo manifestado por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 137 del Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, sentencia de 4 de julio de 2006, en el cual se expone que de la obligación general de garantía de los derechos a la vida y a la integridad física, nacen deberes especiales de

SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 30/2015

protección y prevención, los cuales, en el presente caso, se traducen en deberes de cuidar y de regular, se considera este aspecto como el deber de la autoridad, tomando en consideración que tiene bajo su cargo la administración del Centro Acuático 1, para el servicio al público.

Ahora bien, es importante que se considere adecuar la reglamentación en materia de protección civil, que contemple medidas de seguridad en albercas, piscinas, balnearios y centros recreativos con actividades acuáticas, tal como se ha realizado en los Estados de Chihuahua y Zacatecas, que refieren como una de las obligaciones de los Titulares de dichos establecimientos el responder por reparación del daño a los asistentes en caso de accidentes.

Si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la actuación irregular, consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, también lo es que el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero, y 113, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 de la Ley General de Víctimas, y 7, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, los que establecen la posibilidad de que al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público del Estado, la recomendación que se formule debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación de daño.

Asimismo, con el propósito de evitar que hechos como los analizados en el presente caso se repitan, es necesario que la autoridad impulse la capacitación a sus servidores públicos orientada hacia el correcto ejercicio del servicio público, así como las obligaciones que se contraen del mismo, así como del respeto de los derechos humanos.

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que se realicen acciones efectivas a efecto de garantizar el pago de la reparación del daño a V1, o a sus familiares, que incluya el tratamiento médico y terapéutico que requiera, y se envíen a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.

SEGUNDA. Colabore ampliamente en la investigación que inicie la Contraloría Interna del Estado sobre el presente caso, por tratarse de servidores públicos de ese Centro Estatal de Cultura y Recreación a su cargo, cuya conducta motivó el presente pronunciamiento, y se aporte la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance.

TERCERA. Gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto que el Centro Acuático 1, cuente con un reglamento que contemple y regule la seguridad y vigilancia que se deba proporcionar en la prestación del servicio público, y se informe a esta Comisión del cumplimiento.

CUARTA. Gire instrucciones a quien corresponda, para que el Centro Acuático cuente con equipo para atención en primeros auxilios, así como dispositivos suficientes para rescate, salvamento y de flotabilidad para intervenir y brindar una seguridad efectiva, y remita la información que acredite su cumplimiento.

QUINTA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación al personal del Centro Acuático 1, en materia de prevención, protección civil, primeros auxilios y derechos humanos, remitiendo a esta Comisión la información sobre el cumplimiento de este punto.